

Pacuare ya libre de represas, ¿pero hasta cuándo?

La decisión del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice) de "sustituir" el Proyecto Hidroeléctrico (PH) Pacuare por otro (desconocemos los alcances del PH Balsa Superior), es una muestra de que las instituciones nacionales pueden operar, si se lo proponen, respondiendo a los verdaderos intereses del pueblo de Costa Rica, que incluyen la protección de la cultura, la soberanía y los derechos de las comunidades y la naturaleza. Esta decisión reconoce los argumentos técnicamente fundados que durante años hemos aportado desde las comunidades de la cuenca del Pacuare, incluidas las poblaciones indígenas cabécares y las organizaciones sociales del país. Es por eso que podemos hablar con toda claridad de un triunfo rotundo de quienes defendemos el Pacuare. Ha sido una lucha prolongada. En principio habían proyectadas cinco hidroeléctricas, cuatro de las cuales fueron desestimadas por la presión social. Quedaba el PH Pacuare que bloquearía las aguas del río en el cañón de Dos Montañas, y en cuyo proceso de planeamiento se cometieron grandes atropellos contra la naturaleza y las comunidades, algunos de los cuales fueron reconocidos por instituciones nacionales como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

En muchos foros, textos escritos, innumerables encuentros en las comunidades, reuniones y conversaciones, algunas de las cuales incluyeron a funcionarios del Ice y autoridades de gobierno, evidenciamos la inminente muerte del río por las represas (lo que es muy fácil de constatar en otros proyectos hidroeléctricos en operación) y también la necesidad de convertir esa cuenca en un parque nacional para mejorar su protección integral (idea que según nos dijera el ministro del Ambiente se concretaría en un decreto ejecutivo el 24 de agosto de 2005, día de los parques nacionales). En la lucha por el Pacuare demostramos que la demanda nacional de electricidad no requiere de manera obligada el represamiento de ese río, y que existe un plan nacional e internacional de construir represas en todas las cuencas del país y la región mesoamericana para ampliar los negocios de exportación de electricidad.

La decisión del Ice es inteligente y comprometida con la necesidad de salvaguardar algunas cuencas, lo cual se puede lograr con una adecuada planificación energética nacional que supere el desarrollismo hidroeléctrico y, sobre todo, asegurando que el crecimiento de la oferta energética responda a las necesidades del pueblo costarricense y no a las de los negocios de exportación de energía y al lucro privado de grupos nacionales y empresas transnacionales.

Si bien esta decisión del Ice es un avance notable, quedan muchas tareas pendientes y lo más claro es que la lucha por salvar el Pacuare no pierde vigencia. Un papel no menos importante que el de las comunidades compete a todas las empresas que lo utilizan para sus negocios de *rafting*. Su compromiso debiera de ser de abierto apoyo –moral y material– a las organizaciones sociales y comunidades que han mantenido por años la lucha por salvar el río, cuyo uso no debe convertirlo en simple recurso para ser explotado o en mercancía. To-

dos los puntos de coincidencia entre comunidades, empresas e Ice para la defensa futura del Pacuare deben reforzarse, sobre todo de cara a los peligros internos y externos que pen-

den sobre el país.

Pero sabemos que hay muchos empresarios privados e incluso funcionarios del Ice interesados en explotar el Pacuare. La apertura parcial al sector privado en la operación de la generación eléctrica en Costa Rica representa una amenaza constante para la cuenca del Pacuare y todas las del país. Una posible apertura más agresiva, si se llegara a imponer el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos a la sociedad costarricense, significaría que prácticamente nadie con medios legales podría impedir las represas en cualquier río. Esto se debe a que la condición de "tratado internacional" del TLC deja a las más de 850 leyes vigentes en Costa Rica debajo de éste. A esto sumamos que el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, erróneamente llamado de "fortalecimiento del Ice", más bien busca avanzar, primero hacia la desestatización, y luego hacia la privatización, para asegurar la apertura al capital privado tanto de las telecomunicaciones como del sector energético. Además, la campaña de propaganda a favor del TLC pretende hacer creer que la Asamblea Legisla

por **Oswaldo Durán**



O. Durán Reunión con pobladores de La Alegría de Siquirres

tiva puede discutir ese Tratado, cuando en realidad los diputados únicamente pueden decir sí o no. Otro peligro es que en condiciones de participación estatal o privada externa, las compañías transnacionales pueden aducir tratos injustos y abrir procesos legales contra los países que en su criterio limiten su operación. (La petrolera Harten, por ejemplo, demandó a Costa Rica por \$57.000 millones; y también lo está haciendo la minera canadiense Vannessa Ventures por \$276 millones, suma que irá aumentando dado que las compañías demandan por sus ganancias a futuro. Con el TLC estas disputas legales ni siquiera se realizarían en Costa Rica, sino en Estados Unidos o en el país de origen de la compañía, ante tribunales que obviamente favorecerían los intereses del capital externo.)

La amenaza de muerte del Pacuare, pues, continúa porque los proyectos de las transnacionales están vigentes. El agua no es, por supuesto, su único interés (les interesa el control sobre todos los recursos naturales de América), pero actualmente ese elemento se hace de interés creciente. La hidroeléctrica La Joya, en Tucurrique, Costa Rica, expresa con claridad la alianza del estado con privados transnacionales: se permitió el tráfico de influencias políticas, la corrupción abierta y la desna-

cionalización del agua, todo en contra de las comunidades, la naturaleza y el país. Empresas españolas como Unión Fenosa –que firmó un convenio con el Ice para el PH La Joya– y Endesa, están invirtiendo fuertes sumas de dinero en proyectos en América Latina, lo que nos permite hablar de una re-colonización. El sistema de interconexión eléctrica, que no es solo para Centroamérica, sino que alcanzaría prácticamente todo el continente, expresa la intención de traficar electricidad hacia Estados Unidos. Endesa, de España, como fue discutido y reconocido en el Consejo Directivo del Ice, es socia de los gobiernos de la región y sería la responsable de administrar la red Siepac de 1.830 kilómetros de líneas. Este proyecto cuenta con créditos del Bid por \$170 millones a las empresas eléctricas de Centroamérica y \$70 de un fondo del gobierno español por medio de Endesa. Como se ve, es una clara alianza de los gobiernos locales con el capital foráneo.

En la medida en que los gobiernos sigan impulsando procesos de apertura comercial e impulsando la estrategia de convertir a nuestros países en sitios de atracción de la inversión externa de manera indiscriminada, ninguna región del país está segura. El salvamento –parcial– del Pacuare permite reiterar que también el río Savegre está en pleno riesgo. Otro tanto sucede con la imposición de la posible represa Boruca a las comunidades del sur del país, cuyos espacios de información, diálogo, discusión y negociación han sido escasos o nulos. En el caso de Savegre, la llamada cooperación española está invirtiendo desde hace años en asocio con el estado costarricense y algunos grupos civiles en esa cuenca y en la del río Naranjo, con el fin de ablandar a las comunidades para posibles proyectos hidroeléctricos. De hecho, el PH Savegre está incluido en el Plan de Desarrollo Energético Nacional. No hay que olvidar que ésa es considerada la cuenca más limpia de toda Centroamérica.



O. Durán Taller en Mollejones

